 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 1 de _

No. de Acta: 14	Fecha: 07/04/2026	Nombre Dependencia: SECRETARIA GENERAL
Lugar: Presencial y virtual - SALA BOJAYÁ		Hora Inicio: 11: 30pm Hora Final: 2:00pm

OBJETIVO: Realizar presentación formal de los nuevos abogados que conformaran el grupo de apoyo de U.P – Explicación Sentencia Unión Patriótica VS Colombia.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

ORDEN DEL DÍA.

TEMA	RESPONSABLE
Saludo e Instalación	Sergio Andrés Agón
Desarrollo de la presentación. - Sentencia Militantes U.P Vs Colombia - Antecedentes históricos. - Proceso de resolución para pago	Diana Dalilia Molano Sofía Maldonado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

INTERVENCIÓN SERGIO ANDRÉS AGÓN – SECRETARIO GENERAL


Inicia saludando al equipo del grupo U.P y los nuevos profesionales que entran a apoyar el proceso.

Intervención de Diana Molano

Diana Molano saluda a los asistentes y confirma que la comunicación se escucha adecuadamente. Acto seguido, da inicio a la reunión, extendiendo un saludo general a todos y todas las personas presentes.

Señala que el objeto de la reunión es presentar un esbozo de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de integrantes y militantes de la Unión Patriótica contra el Estado colombiano. Previo a ello, indica la necesidad de realizar una breve presentación.

En este punto, se presenta Diana Molano Franco, quien informa que desde el año anterior se desempeña como líder o coordinadora del grupo encargado del pago de indemnizaciones a las víctimas de la Unión

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 2 de _

Patriótica, en el marco de la referida sentencia. Precisa que dicho grupo está conformado actualmente por ocho (8) abogados y cinco (5) profesionales psicosociales, quienes apoyan integralmente el proceso de reconocimiento y pago de las indemnizaciones.

Posteriormente, se explica que dentro del caso existen cuatro (4) representaciones o intervinientes comunes, a saber: la Corporación Reiniciar, Derechos con Dignidad, el Centro Jurídico de Derechos Humanos y el grupo correspondiente a la familia Díaz Mancilla. Se aclara que, cada vez que se haga referencia a “intervinientes comunes”, se estará aludiendo a estas organizaciones.

Se destaca que la Corporación Reiniciar representó a las víctimas durante el litigio internacional. Sin embargo, una vez proferida la sentencia, cada víctima tiene la libertad de acudir directamente ante la Unidad para hacer seguimiento al pago de su indemnización. En ese sentido, no existe actualmente un contrato de mandato o representación vigente con dicha organización; únicamente se les reconocieron las costas judiciales.

En contraste, se precisa que las organizaciones Derechos con Dignidad y el Centro Jurídico de Derechos Humanos sí cuentan con apoderados judiciales. Por lo tanto, en el proceso de contacto con las víctimas para la recolección de documentos necesarios, es indispensable dirigirse al abogado y no directamente a la víctima. Se advierte que el desconocimiento de esta situación ha generado inconvenientes, tales como la interposición de derechos de petición o acciones de tutela por parte de los apoderados, debido a contactos directos con las víctimas.


Asimismo, se indica que, al momento de expedir la resolución de indemnización, esta debe emitirse a nombre del apoderado judicial, con el fin de garantizar el reconocimiento de los honorarios pactados. De lo contrario, podrían generarse conflictos relacionados con el pago de dichos honorarios.

En cuanto a la familia Díaz Mancilla, se aclara que inicialmente fue representada por la Corporación Reiniciar, pero actualmente sus integrantes realizan directamente el trámite de reclamación de indemnización, sin apoderado judicial. En consecuencia, los pagos se realizan de manera individual. Se reitera que únicamente las víctimas representadas por Derechos con Dignidad y el Centro Jurídico de Derechos Humanos reciben el pago a través de apoderado.

Seguidamente, se identifica como parte demandada al Estado colombiano.

En relación con el contenido de la sentencia, se expone que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los miembros de la Unión Patriótica fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, desplazamientos, tentativas de homicidio y judicializaciones infundadas, entre otras. La Corte calificó estos hechos como un patrón sistemático de violencia política.

Finalmente, se abordan los hechos principales que dieron origen al proceso, señalando que estos ocurrieron entre los años 1984 y 2000. Se cita textualmente un apartado de la sentencia en relación con el surgimiento del partido Unión Patriótica, haciendo referencia a antecedentes desarrollados por la Corte en el caso Cepeda Vargas vs. Colombia, relacionado con el asesinato del senador Manuel José Cepeda Vargas, quien en ese momento era miembro de la Unión Patriótica.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 3 de _

Diana Molano explica que el periodo comprendido hasta el año 2002 estuvo caracterizado inicialmente por un crecimiento de la violencia, seguido de un recrudecimiento de la misma. Señala que esta etapa se distingue por una mayor prevalencia de la violencia no letal.

En este contexto, la sentencia establece una distinción entre violencia letal y no letal. La violencia letal comprende hechos como asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales, así como las desapariciones forzadas. Por su parte, las demás violaciones a los derechos humanos fueron clasificadas como violencia no letal.

Posteriormente, indica que una de las formas más visibles de victimización contra los integrantes de la Unión Patriótica fue la violencia homicida dirigida a sus representantes en corporaciones públicas, ampliamente difundida en medios masivos de comunicación como televisión y radio.

Menciona, como casos emblemáticos, los asesinatos de Jaime Pardo Leal (11 de octubre de 1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990), ambos candidatos a la Presidencia de la República.


Asimismo, refiere que fueron asesinados cuatro senadores de la Unión Patriótica, entre ellos Pedro Nel Jiménez Obando, Pedro Luis Valencia Giraldo, Bernardo Jaramillo Ossa y Manuel Cepeda Vargas. Destaca de manera especial que, en la actualidad, un hijo del doctor Pedro Nel Jiménez hace parte del Grupo Sustanciador de la Unión Patriótica, y que su padre fue asesinado cuando él tenía aproximadamente cinco años de edad.

Añade que también fueron víctimas cuatro representantes a la Cámara y un amplio número de militantes, líderes y simpatizantes del partido. Precisa que el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó un total de 3.122 asesinatos selectivos, perpetrados contra personas vinculadas a la Unión Patriótica por el solo hecho de su pertenencia o afinidad política.

Señala que estos hechos constituyeron un exterminio sistemático de un grupo político de oposición, lo cual fue una de las principales razones para la declaratoria de responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos. Indica, además, que a estas cifras se suman 544 víctimas adicionales.

En cuanto a las conclusiones de la sentencia, expone que la Corte determinó la existencia de tolerancia, aquiescencia y participación estatal en los hechos, así como la falta de prevención y protección, y la existencia de impunidad estructural. Subraya que se trató de una persecución dirigida contra un grupo político específico.

Indica que el 30 de enero de 2023 fue notificada al Estado colombiano la sentencia proferida el 27 de julio de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, mediante la cual se declaró la responsabilidad internacional del Estado por múltiples violaciones a los derechos y garantías consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resalta que este fallo constituye un hito, en tanto no existía un pronunciamiento previo de tal magnitud contra el Estado colombiano por violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 4 de _

En la sentencia se ordenan diversas medidas de reparación, entre ellas el reconocimiento de indemnizaciones compensatorias a un universo superior a 6.000 víctimas pertenecientes a la Unión Patriótica. Asimismo, se concluye la afectación al derecho al pluralismo democrático.

Seguidamente, hace referencia al párrafo 530 de la sentencia, el cual considera de especial importancia para el estudio del caso, e indica la necesidad de familiarizarse con su contenido.

En relación con la parte lesionada, señala que la Corte Interamericana distingue entre víctimas directas e indirectas del exterminio de la Unión Patriótica. Estas víctimas fueron clasificadas en tres anexos, los cuales fueron aportados por los intervinientes comunes, constituyen prueba dentro del proceso y hacen parte integral del fallo.

DIANA MOLANO señala que, en materia de intereses de mora, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio y las normas concordantes, así como el concepto de mora previsto en el Código Civil. En este sentido, enfatiza que cada caso debe analizarse de manera individual, dado que constituye un universo particular.

Explica que, una vez el abogado sustanciador recibe el expediente de una víctima, el primer paso consiste en establecer contacto con esta, ya sea mediante llamada telefónica o a través del correo electrónico disponible. En dicho contacto se solicitan dos documentos esenciales para dar inicio al proceso de pago: copia de la cédula de ciudadanía y certificación bancaria.


Aclara que, si la entidad realiza el requerimiento en una fecha determinada y la víctima responde varios meses después, dicho tiempo no es imputable al Estado colombiano. En consecuencia, no es procedente contabilizar ese periodo dentro del término para efectos del reconocimiento de intereses de mora. Por lo tanto, se debe descontar el tiempo correspondiente a la demora atribuible a la víctima.

Enfatiza la importancia de verificar este aspecto al momento de proyectar las resoluciones, señalando que es un punto de revisión obligatoria. Indica que, durante el año anterior, se presentó un inconveniente debido a que algunos funcionarios proyectaron aproximadamente veinticinco (25) resoluciones incluyendo intereses de mora, pese a que no procedían, dado que las víctimas habían tardado un periodo considerable en responder a los requerimientos.

Seguidamente, retoma el tema de los plazos, reiterando que la sentencia de interpretación, proferida el 24 de enero de 2024, no sustituye la sentencia original ni reinicia los términos. En consecuencia, el plazo continúa siendo único: un (1) año contado a partir del 30 de enero de 2023.

Posteriormente, aborda el papel de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) dentro del proceso. Explica que esta entidad fue designada como la encargada de ejecutar los recursos necesarios para dar cumplimiento a los numerales 25 y 38 de la parte resolutive de la sentencia.

Precisa que el numeral 25 corresponde a la garantía de funcionamiento de la Comisión de Constatación. En este sentido, el Estado colombiano dispuso la creación e integración de dicha comisión, siendo la UARIV la entidad responsable del pago de los honorarios de sus integrantes. Indica que la comisión estuvo conformada

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023
		Página 5 de _

por aproximadamente cincuenta y siete (57) personas, entre ellas treinta y tres (33) comisionados, además de abogados y un equipo interdisciplinario de profesionales.

Por su parte, el numeral 38 se refiere específicamente al reconocimiento y pago de las indemnizaciones a las víctimas. En consecuencia, señala que los numerales 25 y 38 constituyen el núcleo de las obligaciones asignadas a la Unidad.

Finalmente, informa que el cumplimiento del numeral 25 ya concluyó, dado que la Comisión de Constatación dejó de funcionar, por lo que actualmente la UARIV continúa con la ejecución del numeral 38, correspondiente al pago de las indemnizaciones reconocidas a las víctimas de la Unión Patriótica.

DIANA MOLANO indica que, en los casos de víctimas que hayan fallecido con posterioridad a la expedición de la sentencia —esto es, después de su notificación el 30 de enero de 2023—, se debe aplicar un procedimiento ágil o expedito para el pago de las indemnizaciones a sus familiares. Precisa que dicho procedimiento ya se encuentra establecido, aunque su implementación tomó un tiempo considerable durante el año anterior.

Señala que, a partir de los borradores existentes y en articulación con la Oficina Asesora Jurídica, se logró consolidar el denominado procedimiento de pago a causahabientes o derechohabientes. En este se detallan los lineamientos definidos por la Corte, los montos de indemnización y la documentación requerida a los familiares de las víctimas directas, siendo aplicable exclusivamente a este grupo. Informa que el procedimiento será remitido a los correos electrónicos de los participantes y que, de ser necesario, se programará una explicación adicional en modalidad virtual.


Asimismo, manifiesta que la asignación de casos dependerá, entre otros factores, de la ubicación de los funcionarios, aspecto que será abordado en un espacio posterior.

Agradece la atención de los asistentes y expresa que el esbozo presentado busca facilitar la comprensión del contenido de la sentencia. Destaca que este procedimiento implica también atención directa a víctimas en la Unidad, dado que diariamente se reciben solicitudes de información sobre el estado de los pagos, especialmente tras la reciente expedición de múltiples resoluciones. Indica que existe un incremento significativo en derechos de petición y acciones de tutela, lo cual hace indispensable el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica para dar cumplimiento oportuno a las obligaciones.

Reitera que el equipo asumirá las tareas de contacto con las víctimas, solicitud de documentos, creación de expedientes y proyección de los actos administrativos. Señala que, en caso de que el Gobierno Nacional no disponga de los recursos suficientes o los asigne de manera parcial, dicha situación corresponde a una responsabilidad del Estado colombiano, y no a la gestión de la Unidad. En ese sentido, subraya la importancia de dejar trazabilidad de todas las actuaciones adelantadas.

Indica que, a la fecha, el equipo se encuentra al día en sus responsabilidades, pero resalta la necesidad de mantener el ritmo de trabajo establecido.

Posteriormente, DIANA MOLANO invita a los asistentes a formular preguntas breves, en atención a que se tiene programada otra reunión.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 6 de _

Intervención de Sofia Maldonado.

Sofia Maldonado se presenta como profesional transversal del equipo Unión Patriótica, indicando que su rol consiste en brindar acompañamiento en temas relacionados con resoluciones, presupuesto, compilación, archivo y demás aspectos operativos del proceso.

Manifiesta su disposición para apoyar y resolver cualquier inquietud que surja durante el desarrollo de las actividades. Informa que se compartirá información relevante con el equipo y que serán incluidos en un grupo de WhatsApp, el cual servirá como canal principal de comunicación y difusión de lineamientos.

Añade que en dicho espacio se compartirán directrices, incluyendo lineamientos sobre la elaboración de actos administrativos. Asimismo, señala que se habilitarán espacios adicionales para socializar los repositorios de información, carpetas y archivos utilizados en el proceso.

Finalmente, da la bienvenida a los participantes y agradece su colaboración.

Dina Sofia Maldonado Pinzón explica que la creación de terceros en el sistema SIIF Nación es un proceso articulado con la Dirección Financiera y los profesionales financieros del grupo. Indica que este procedimiento implica cruces de información con el aplicativo Indemniza y otras herramientas, siendo este el principal sistema de verificación.

Señala que el procedimiento detallado será remitido por correo electrónico a cada uno de los participantes, con el fin de garantizar claridad en su ejecución. Agrega que se programarán futuras reuniones —posiblemente en modalidad mixta— en las cuales se realizará un ejercicio práctico con expedientes reales para explicar el proceso de manera detallada.


Intervención de participante (sin identificación nominal en el registro)

Un participante plantea la necesidad de analizar el contexto de responsabilidades en el proceso, señalando que, si bien el responsable en abstracto es el Estado, la Unidad actúa como entidad ejecutora. En ese sentido, consulta sobre las estrategias para gestionar el riesgo de mora en los pagos y el eventual agotamiento del procedimiento administrativo.

Asimismo, sugiere la posibilidad de contar con liquidaciones preliminares que permitan solicitar oportunamente los recursos al Ministerio de Hacienda, considerando que la ejecución de las actuaciones administrativas puede extenderse en el tiempo.

Intervención de Dina Sofia Maldonado Pinzón (respuesta)

Dina Sofia Maldonado Pinzón responde que ya se han adelantado reuniones con la Secretaría General, el equipo financiero, la Dirección Jurídica y el Ministerio de Hacienda, en las cuales se remitió un documento detallando el costo total del cumplimiento de la sentencia, con el fin de gestionar los recursos necesarios. Explica que corresponde al Ministerio de Hacienda definir la asignación presupuestal en la vigencia correspondiente. No obstante, enfatiza que la Unidad debe cumplir con su misionalidad, lo cual implica la expedición y notificación de los actos administrativos dentro de los términos establecidos.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 7 de _

Subraya la importancia de dejar evidencia de la solicitud de recursos al Ministerio, indicando que, en caso de no asignarse oportunamente, la responsabilidad recaerá en dicha entidad. Advierte que, de no efectuarse los pagos dentro del plazo de un (1) año posterior a la notificación, se generarían intereses, incluso en moneda extranjera, lo cual podría derivar en un daño fiscal.

Finalmente, concluye que la Unidad debe avanzar en la notificación de los actos administrativos a la totalidad de las víctimas reconocidas, razón por la cual se ha dispuesto un equipo amplio de profesionales para cumplir con esta tarea.

Dina Sofia Maldonado Pinzón señala que, si bien el Estado colombiano ha dado cumplimiento a múltiples medidas ordenadas en la sentencia, la Unidad concentra su actuación exclusivamente en los numerales 25 y 38 de la parte resolutive.

Indica que el procedimiento culmina con la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la indemnización. Precisa que dicho acto es susceptible de recursos en sede administrativa. Al respecto, se menciona que actualmente la competencia para decidir estos asuntos se encuentra delegada en la Secretaría General, y que, en principio, procedería el recurso de reposición.


Explica que los pagos efectuados por la entidad se fundamentan estrictamente en lo dispuesto en las resoluciones de constatación. Señala que, en la práctica, las eventuales inconformidades suelen centrarse en la cuantificación de la indemnización; por tanto, en caso de presentarse errores en la liquidación, estos podrían ser objeto de recurso de reposición.

Durante la intervención, se aclara que el pago que se realiza corresponde a una indemnización y no a otras medidas de reparación, en tanto estas ya han sido otorgadas en otros ámbitos (como las reparaciones simbólicas). En este sentido, se plantea la necesidad de analizar si el acto administrativo debe considerarse como un acto definitivo o como un acto de ejecución, dado que de ello depende su régimen de recursos. Se sugiere que, aunque en principio podría tratarse de un acto de ejecución, el hecho de ser expedido por una entidad distinta a la que emitió la resolución de constatación podría darle la naturaleza de acto definitivo, susceptible de recurso de reposición.

No obstante, Dina Sofia Maldonado Pinzón destaca que el procedimiento aplicado por la entidad es claro, estructurado y transparente, lo cual ha permitido informar adecuadamente a las víctimas sobre los valores a reconocer, incluyendo aspectos como la tasa representativa del mercado. Señala que, hasta la fecha, no se han presentado recursos de reposición, en razón a que los montos indemnizatorios están previamente definidos en la sentencia, lo que reduce significativamente el margen de controversia.

Asimismo, se precisa que las resoluciones emitidas por la Comisión de Constatación llegan en firme a la Unidad, dado que ya se han agotado las etapas y términos previstos para su revisión, incluyendo la posibilidad de solicitar reconsideración. En consecuencia, no procede recurso alguno frente a dichas decisiones en esta etapa, ni es posible reabrir discusiones que debieron surtir ante dicha instancia.

Se reitera que los montos de indemnización están establecidos en la sentencia y, por tanto, tienen un carácter estándar. La única variación posible se relaciona con el momento de la liquidación, particularmente por efecto de la tasa de cambio. Este aspecto es determinado por el equipo financiero, sin que hasta el momento se hayan presentado reclamaciones por parte de las víctimas.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 8 de _

Finalmente, se destaca que, tras más de treinta años de ocurridos los hechos, el principal interés de las víctimas es recibir el pago de las indemnizaciones reconocidas.

Cierre de la sesión

Dina Sofia Maldonado Pinzón agradece la participación de los asistentes y da por finalizada la reunión. Por su parte, Ángel Hernández se despide de los participantes, agradeciendo el espacio.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS
1. Lista de asistencia.

Responsable de la reunión:

Nombre: Sergio Andrés Agón – Diana Molano

Cargo: Contratista.

Dependencia: Secretaría General



Unidad para
las **Víctimas**

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA

Código: 162,14,15-10

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 05

MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS
FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS

Fecha: 16/11/2023

Página **9** de **_**





Unidad para
las **Víctimas**

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA

Código: 162,14,15-10

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 05

MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS

Fecha: 16/11/2023

Página **1** de _



Unidad para
las Víctimas



SENTENCIA INTEGRANTES Y MILITANTES UNIÓN PATRIÓTICA VS COLOMBIA



Decisión judicial sobre derechos y reconciliación nacional

“Cuando el aparato judicial estatal falla de manera estructural frente a violaciones sistemáticas, la jurisdicción internacional deja de ser subsidiaria en la práctica y se convierte en garantía efectiva de los derechos humanos.”



I. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO INTEGRANTES Y MILITANTES DE LA UNIÓN PATRIÓTICA VS. COLOMBIA

- **Sentencia proferida el 27 de Julio de 2022**

Notificación al Estado Colombiano: 30 de enero de 2023

- **Sentencia de Interpretación: 24 de enero de 2024 (decide sobre solicitudes de las partes sobre montos y formas de pago, características individual o colectiva de las medidas de reparación, etc)**
- **Decisión proferida por los siguientes Jueces:**
 - 1. Elizabeth Odio Benito, Presidenta;**
 - 2. L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;**
 - 3. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez**
 - 4. Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez**
 - 5. Ricardo C. Pérez Manrique, Juez**





La competencia de la Corte Interamericana en el caso de la Unión Patriótica no deriva de la inexistencia de jurisdicción interna, sino de su ineficacia estructural, que configura una denegación de justicia y activa el control internacional conforme al principio de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Naturaleza subsidiaria y complementaria del Sistema Interamericano

El Sistema Interamericano se estructura bajo el **principio de subsidiariedad**, conforme al cual:

La jurisdicción internacional **no sustituye** a la nacional, sino que actúa cuando esta resulta ineficaz.

Este principio deriva de:

- **Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos**

Implica un deber estatal de:

- **Investigar seriamente**
- **Sancionar a los responsables**
- **Reparar integralmente**



2. Agotamiento de recursos internos y sus excepciones

El artículo 46.1.a de la Convención establece como regla:

Agotar los recursos internos

Sin embargo, el artículo 46.2 introduce excepciones cuando:

- No existe debido proceso legal
- No hay acceso efectivo a recursos
- Hay retardo injustificado

+Aplicación al caso UP:

La Corte determinó que en Colombia hubo:

- Ineficacia estructural de la justicia penal
- Dilaciones indebidas
- Ausencia de resultados materiales

Configurando una **denegación de justicia de carácter estructural**

3. Estándar de “debidia diligencia reforzada”

En contextos de violencia sistemática, la Corte exige un estándar agravado:

Debida diligencia reforzada

Esto implica:

- Prevención frente a riesgos conocidos
- Investigación oficiosa, seria y exhaustiva
- Análisis de patrones (no casos aislados)

En el caso UP:

El Estado:

- Tenía conocimiento del riesgo contra el grupo político
- No adoptó medidas efectivas
- Fragmentó la investigación

Violación del deber de garantía (art. 1.1 CADH)

4. Configuración de responsabilidad internacional por omisión

La Corte no exige únicamente acción directa estatal.

También hay responsabilidad cuando:

El Estado **no previene, no investiga o tolera violaciones**

Esto incluye:

- Aquiescencia
- Tolerancia
- Falta de control

En este caso:

Se acreditó:

- Participación de agentes estatales en algunos hechos
- Tolerancia frente a actores armados
- Fallas sistemáticas de protección

Responsabilidad internacional por acción y omisión

5. Violación estructural y carácter masivo

Uno de los aportes más relevantes del caso es la conceptualización de:

Violación estructural de derechos humanos

Características:

- Repetición sistemática
- Dirigida contra grupo específico (oposición política)
- Fallas institucionales persistentes

Consecuencia jurídica:

- Supera el análisis individual
- Justifica intervención internacional amplia
- Impone reparaciones estructurales

6. Afectación del principio democrático

La Corte introduce un elemento clave:

La protección de la **democracia como bien jurídico**

La eliminación de la UP implicó:

- Restricción del pluralismo político
- Supresión de la oposición
- Alteración del sistema democrático

→ Violación indirecta de derechos políticos (art. 23 CADH)

7. Ineficacia de la jurisdicción interna como presupuesto de competencia

En síntesis, la competencia de la Corte se activa porque:

✓ Se configuró:

- Impunidad estructural
- Falta de debida diligencia
- Ineficacia de recursos internos

✓ Lo que equivale a:

Denegación de justicia internacionalmente relevante

II.INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

- ✓ **El 29 de junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica” contra la República de Colombia.**
- ✓ **La controversia versa sobre las alegadas graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil presuntas víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (en adelante también “UP”) en Colombia a partir de 1984 y por más de veinte años.**

- ✓ **La Comisión calificó estos hechos como un exterminio y consideró que el Estado es responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto y de garantía, por las privaciones del derecho a la vida, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio de los integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica. Asimismo, determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial por la alegada criminalización y torturas contra integrantes y simpatizantes de la Unión Patriótica.**
- ✓ **Además, concluyó que el Estado violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación, puesto que el móvil de las alegadas violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las presuntas víctimas a un partido político y la expresión de sus ideas a través de este. También, estimó que el Estado violó el derecho a la honra y dignidad de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica puesto que estos habrían sido estigmatizados tanto por agentes estatales como por actores no estatales.**

III.PARTES DEL PROCESO

A) REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS O INTERVINIENTES COMUNES:

- CORPORACION REINICIAR: Constituida como una organización que trabaja en defensa de los derechos humanos y la Paz en Colombia dado su estatus consultivo ante la ONU y la OEA y representó a un amplio grupo de víctimas del genocidio cometido contra la Unión Patriótica.
- Organización de Derechos con Dignidad (DCD)
- Centro Jurídico de Derechos Humanos (CJDH)
- Representantes de la Familia Diaz Mansilla.

B) DEMANDADO: ESTADO COLOMBIANO

IV. EN EFECTO LA CORTE IDH EN SU SENTENCIA CONCLUYO

1. Que los miembros de la Unión Patriótica fueron víctimas de:

- Asesinatos sistemáticos / Ejecuciones extrajudiciales
- Desapariciones forzadas
- Torturas
- Amenazas y desplazamientos
- Tentativas de homicidios
- Judicializaciones infundadas, entre otras.

➤ La Corte calificó estos hechos como un **patrón sistemático de violencia política**.

1.Hechos principales:

- Entre 1984 y los años 2000:
 - Miles de integrantes de la UP fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

“A.2. Surgimiento del Partido Unión Patriótica 191. Esta Corte ya ha tenido la oportunidad de referirse al surgimiento de esta agrupación. Así, en el caso Cepeda Vargas Vs. Colombia estableció que la Unión Patriótica (en adelante también “UP”), se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante las “FARC”) y el gobierno del entonces Presidente Belisario Betancur Cuartas, pacto conocido como “Acuerdos de la Uribe”, firmado el 24 de mayo de 1984. Como parte de los acuerdos de paz, el Gobierno Nacional se comprometió a otorgar las garantías y seguridades indispensables para que la UP pudiera actuar en las mismas condiciones que los demás partidos políticos. La UP participó por primera vez en las elecciones en 1986. Entre 1986 y 1994, la UP obtuvo considerables resultados de representación en el Senado, la Cámara de Representantes, Concejos y Alcaldías Municipales y la Asamblea Nacional Constituyente de 1990”

A.4 Violencia sistemática contra los integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Párrafo 202. De acuerdo con el Centro Nacional para la Memoria Histórica (CNMH), se pueden delimitar cuatro períodos en el proceso de victimización de la UP. El primero va de 1984 a 1988 y se caracteriza por una violencia con tendencia creciente que tiene su momento crítico en 1988. Coincide con la creación de la UP hasta su umbral de éxito político como tercera fuerza en las elecciones legislativas y presidenciales de 1986 y las elecciones locales y regionales de 1988. Es durante este período que se registra la mayor participación de agentes del Estado de forma directa. Un segundo período, que va desde 1989 hasta 1994, se caracteriza por un decrecimiento de la violencia, aunque esta se mantiene. Los hechos de violencia en este período se centran en la dirigencia local, regional y nacional. Asimismo, el principal actor de la violencia va a ser los grupos paramilitares.

El punto de inflexión fue el asesinato del senador Manuel Cepeda el 9 de agosto de 1994. El tercer período se extiende desde 1995 hasta 1997 y se caracteriza por ser el más violento, en particular en la región de Urabá, último de los bastiones de éxito político electoral de la UP. De esta forma, la UP decidió no participar en las elecciones locales y regionales de 1997. Precisamente, este es el período en donde el protagonismo de los grupos paramilitares se eleva, siéndoles atribuibles el 83.5% de los casos. El último período va desde 1998 hasta 2002 y está marcado por un primer período de decrecimiento de la violencia, para luego vivir un recrudecimiento de esta. Esta fase se distingue por una mayor prevalencia de la violencia no letal, en particular del desplazamiento forzado y las

203. Una de las formas más visibles de la victimización hacia los integrantes y militantes de la UP fue la violencia homicida contra sus representantes en las corporaciones nacionales. Como fuera mencionado, los días 11 de octubre de 1987 y 22 de marzo de 1990 fueron asesinados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, respectivamente, quienes fueron candidatos a la Presidencia (supra párr. 195). Asimismo, fueron asesinados cuatro senadores (Pedro Nel Jiménez Obando el 1 de septiembre de 1986; Pedro Luis Valencia Giraldo, el 14 de agosto de 1987; Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990; Manuel Cepeda Vargas, el 9 de octubre de 1994), cuatro representantes a la Cámara (Leonardo Posa Pedraza, el 30 de agosto de 1986; Octavio Vargas Cuellar, el 14 de diciembre de 1986; Henry Millán González, el 7 de septiembre de 1993 y Octavio Sarmiento Bohórquez, el 1 de octubre de 2001), además de varias personas que ejercían cargos de organización como Teófilo Forero, el 27 de febrero de 1989 y José Antequera, el 3 de marzo de 1989¹⁵¹. En el ámbito local, catorce diputados en ejercicio fueron asesinados entre 1986 y 1997 (Carlos Julián Vélez, José Rafael Reyes Malagón, Pedro Malagón, José Rodrigo García Orozco, Carlos Kovacs Baptiste, Lui Antonio Pérez Sánchez en el departamento de Meta; Gabriel Jaime Santamaría Montoya y Sofronio Hernández en Antioquia; Sotero Escobar y Leonel Forero Hurtado en Arauca; Gerardo Cuellar y Arsenio Valencia Arias en Caquetá; Alexis Hinestroza Valois, Víctor Manuel Ochoa Amaya en Cesar; Alfonso Guillermo Cujavante Acevedo en Córdoba; Eduardo García en Risaralda y Carlos Enrique Rodríguez Celis en Santander)¹⁵². Si se toman todos los hechos de violencia registrados por el CNMH, del total de las víctimas, 200 eran alcaldes, 418 de concejales, 43 eran diputados, 26 eran congresistas y 2 eran gobernadores¹⁵³.

204. La violencia contra la UP no se agotó en el asesinato de sus líderes políticos. Entre mayo de 1984 y diciembre de 2002, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), documentó 3.122 asesinatos selectivos, 544 víctimas(Tomado de la sent.Corte IDH pág. 61, 62 y ss)

1. Determinando de esta manera la Corte IDH que existió:

a. Tolerancia, aquiescencia o participación estatal

b. Falta de prevención y protección

c. Impunidad estructural

➤ Se trató de una **persecución contra un grupo político específico.**



1. Derechos violados:

El 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificó al estado colombiano la Sentencia proferida el 27 de julio de 2022 correspondiente al caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia” en la que declaró la responsabilidad internacional de Colombia por múltiples violaciones a los derechos y garantías contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

- Derecho a la vida
- Derecho a la integridad personal
- Libertad personal
- Libertad de asociación y participación política
- Garantías judiciales
- Protección judicial

ordenando medidas de reparación, entre ellas, el reconocimiento de indemnizaciones compensatorias a un universo plural de más de seis mil víctimas pertenecientes al partido político Unión Patriótica, concluyendo que también se había afectado el **pluralismo democrático**.

1. Parte lesionada:

- Incluye:
 - Víctimas Directas
 - Víctimas Indirectas: Familiares
- Clasificadas por Anexos : Hacen parte Integral de la sentencia los listados o Anexos allegados por los intervinientes comunes y reconocidos por la Comisión IDH y corroborados por la Corte IDH.

-

"A. Parte Lesionada

529. Este Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Esta Corte considera como "parte lesionada" a las personas que figuran en los Anexos I, II y III de víctimas a esta Sentencia, respecto de quienes se declaró una violación en su perjuicio, tomando en cuenta lo explicado en el párrafo 289 de la Sentencia. Tales personas serán acreedoras y beneficiarias de las medidas de reparación que el Tribunal ordene en el presente capítulo.

530. La Corte ha conformado tres Anexos de víctimas a esta Sentencia:

a) En el Anexo I se encuentran todas aquellas víctimas directas respecto de las cuales se cuenta con prueba que permite constatar su identidad y parentesco;

b) En el Anexo II se encuentran las víctimas de violaciones a los derechos contenidos en los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales, debido proceso, juez competente) y 25 (protección judicial: recurso rápido, sencillo y efectivo ante juez competente) de la Convención Americana que son familiares de las víctimas mencionadas en el Anexo I.

c) En el Anexo III se incluye a todas aquellas víctimas respecto de quienes no fue aportada al Tribunal la prueba que permita corroborar sus nombres completos y números de identidad. La Corte reconoce la dificultad de aportación de esa prueba en este proceso, debido a la complejidad que implica este caso por las graves y múltiples violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de una gran cantidad de víctimas y aspectos tales como los distintos lugares geográficos y extensión del tiempo en que ocurrieron las violaciones perpetradas.

(Sent. Interpretación. Pág.144)

En relación con estas víctimas, respecto de las cuales no fue posible aportar prueba a la Corte que le permitiera corroborar sus nombres completos y número de identificación (dificultad de aportación de dicha prueba por aspectos como los diferentes lugares geográficos donde ocurrieron los hechos , así como el tiempo que había transcurrido desde la ocurrencia de los hechos a la fecha de la emisión de la sentencia, La CORTE IDH ordenó crear una **comisión para verificación de identidad y parentesco** que constatará a éstas víctimas.



6. MEDIDAS DE REPARACIÓN

◆ Reparaciones individuales

- Indemnizaciones económicas
- Atención psicosocial

◆ Reparaciones colectivas

- Actos públicos de reconocimiento
- Medidas de memoria histórica
- Garantías de no repetición

◆ Medidas estructurales

- Investigación y sanción de responsables
- Fortalecimiento institucional
- Protección de líderes políticos

7. MONTOS MEDIDA DE INDEMNIZACION

Sentencia caso "Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica" Vs Colombia	
Anexo I	
Hecho Victimizante	Monto USD
Desaparición Forzada (626 a)	\$55.000
Ejecución Extrajudicial (626 c)	\$35.000
Tortura (626 e)	\$20.000
Tentativas de violación del derecho a la vida (626 f)	\$5.000
Violaciones a la integridad personal (626 f)	\$5.000
Detenciones arbitrarias (626 f)	\$5.000
Amenazas (626 f)	\$5.000
Hostigamientos (626 f)	\$5.000
Criminalización indebida mediante procesos penales (626 f)	\$5.000
Adicionales casos EE y DF menores de edad al momento de los hechos) (626 g)	\$10.000
Adicionales casos de tentativa de homicidio menor edad al momento de los hechos (626 h)	\$5.000
Desplazamiento Forzado (568)	\$15.000
Desplazamiento Forzado - Daño Immaterial (626 i)	\$5.000
Violación garantías judiciales y protección judicial (626 j)	\$5.000
Anexo II	
Hecho Victimizante	Monto USD
Desaparición forzada	\$30.000
Desaparición forzada	\$10.000
Ejecución extrajudicial	\$20.000
Ejecución extrajudicial	\$10.000
Violación garantías y protección judiciales (626 j)	\$5.000
Anexo III	
Hecho Victimizante	Monto USD
Desaparición forzada	\$55.000
Ejecución extrajudicial	\$35.000
Tortura	\$20.000
Tentativas de violación del derecho a la vida	\$5.000
Violaciones a la integridad personal	\$5.000
Detenciones arbitrarias	\$5.000
Amenazas	\$5.000
Hostigamientos	\$5.000
Criminalización indebida mediante procesos penales	\$5.000
Menores de Edad (Fecha de los hechos)	\$10.000
Masacre o tentativa de homicidio (Menor Edad hechos)	\$5.000
Tentativa de homicidio (Menor Edad)	\$5.000
Desplazamiento Forzado	\$5.000
Violación garantías judiciales y protección judicial (626 j)	\$5.000

¿EN CONCLUSION...

El 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificó al estado colombiano la Sentencia del 27 de julio de 2022 correspondiente al caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia” en la que declaró la responsabilidad internacional de Colombia por diversas violaciones a los derechos y garantías contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenando medidas de reparación, entre ellas, el reconocimiento de indemnizaciones compensatorias a un universo plural de más de seis mil personas, víctimas pertenecientes al partido político Unión Patriótica.

❖ **NATURALEZA DEL FALLO:**

Fallo internacional de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para el estado Colombiano, no depende del derecho interno.

“El pago de la reparación no es discrecional: es una obligación internacional con plazo perentorio.”

❖ **PLAZO PARA EL PAGO DE LA MEDIDA DE REPARACION INDIVIDUAL:**

El Estado colombiano debe pagar las indemnizaciones:

Dentro del plazo de 1 año (12 meses) contado a partir de la notificación de la sentencia (30 DE ENERO DE 2023).

❖ **Excepción importante (caso UP)**

Dado el gran número de víctimas:

El pago está condicionado a:

- Identificación completa de las víctimas
- Verificación de parentesco (Anexos II y III)

✓ **A través de la comisión creada por la Corte**

❖ **Consecuencia de no pago en tiempo ordenado por la Corte IDH:**

Si el Estado no cumple: Se generan Intereses moratorios

❖ **Naturaleza del plazo**

Este plazo:

- Es obligatorio (vinculante)
- Deriva del derecho internacional
- No depende del derecho interno colombiano

Colombia tiene un plazo de 1 año desde la notificación de la sentencia para pagar las indemnizaciones, sujeto a la identificación y verificación de las víctimas en los casos correspondientes.

“El pago de la reparación no es discrecional: es una obligación internacional con plazo perentorio.”

NOTA: EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES A LAS VÍCTIMAS SE CUENTA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE FONDO, REPARACIONES Y COSTAS (30 DE ENERO DE 2023)

Sentencia principal notificada: 30 de enero de 2023

Sentencia de interpretación: 24 de enero de 2024

Ello en cuanto la sentencia de interpretación:

- **No reemplaza la sentencia original**
- **No reinicia automáticamente los plazos**
- **✓ Solamente: Aclara / Precisa**

❖ **Matiz relevante en este caso**

Dado que el caso de la Unión Patriótica incluye:

- **Comisión de verificación**
- **Identificación progresiva de víctimas**

En la práctica:

- **El cumplimiento puede ser progresivo**
- **Pero el deber de iniciar pagos no se suspende**

Lo que sí existe es:

✓ Complejidad en la ejecución por:

- **Comisión de verificación**
- **Identificación progresiva de víctimas**

Esto afecta el ritmo de cumplimiento, pero NO el inicio del término

V. LA UARIV COMO PARTE DEL PROCESO

1. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, la Unidad para las Víctimas, la Unidad o la UARIV) fue designada como la entidad ejecutora o encargada de ejecutar los recursos para dar cumplimiento a los numerales 25 (garantía de funcionamiento Comisión de Constatación) y 38 (indemnizaciones) de la Sentencia “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia” proferida por la Corte IDH. (Decreto 1643 del 11 de octubre de 2023)
2. El reconocimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH constituye un proceso novedoso dentro de la UARIV. Si bien la Unidad para las Víctimas es la entidad encargada del programa administrativo de reparaciones a las víctimas del conflicto armado en Colombia, fue necesario ajustar sus procesos y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas en sus plataformas para dar cumplimiento a lo ordenado.

3. La Sentencia representó un avance significativo en el reconocimiento y la reparación integral de las víctimas de la Unión Patriótica. En cumplimiento de su mandato y, aprovechando su experiencia en la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, la Unidad para las Víctimas diseñó y puso en marcha un procedimiento especial, dentro de su estructura, para abordar este reto.

4. Desde que se designó a la Unidad el 11 de octubre de 2023 como la entidad encargada de ejecutar las medidas de reparación, se inició el trámite para la asignación de los recursos económicos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, fue hasta el 26 de diciembre de 2023 cuando se obtuvo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (en adelante CDP), por un monto de \$2.097.082.800. A partir de ese momento, fue posible proceder con la elaboración y ejecución de las primeras resoluciones expedidas durante el año 2023.

Resolución	No. Personas	Valor pagado
09312 del 27 de diciembre de 2023	9	\$232.287.000
09374 del 29 de diciembre de 2023	13	\$1.184.835.500

Mediante el pago de estas 22 resoluciones por un valor de \$1.417.122.500 el Estado colombiano inició la efectiva implementación de la medida de indemnización dispuesta por la Corte IDH.

VIGENCIA 2024

Mejoras en la articulación entre el sistema de gestión documental y la liquidación y pago de las medidas de indemnización

La Unidad cuenta con una amplia experiencia en la reparación administrativa de las víctimas del conflicto armado en Colombia, para ello ha desarrollado herramientas tecnológicas con el objetivo de optimizar el procedimiento de liquidación y pago en relación con las resoluciones o actos administrativos que ordenan la indemnización. Estas son:

➤ INDEMNIZA

Indemniza es una herramienta tecnológica utilizada por la Unidad para la gestión y procesamiento de la indemnización de las víctimas del conflicto armado. Esta plataforma está diseñada para optimizar el proceso administrativo de reconocimiento, liquidación y pago de las medidas de indemnización a las víctimas, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), Ley 387 de 1997, Ley 418 de 1997, Decreto 1290 de 2008, y la Ley 975 de 2005 (Fondo para la Reparación a las Víctimas - FRV).

En 2024 se logró incorporar el procedimiento de reconocimiento y pago de la medida de indemnización ordenada por la Corte IDH en el caso de la Unión Patriótica dentro de la herramienta Indemniza. Esta integración permite la creación de los casos a pagar hasta la elaboración de la resolución de pago y su posterior integración con ArchiDHu para la comunicación de la resolución a la víctima.

➤ ArchiDHu

Actúa como sistema de gestión documental, permitiendo organizar, almacenar y gestionar de manera eficiente los documentos digitales relacionados con los procesos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Su función principal es asegurar que toda la información y documentación vinculada a los casos de las víctimas sea centralizada, accesible y protegida dentro de un entorno digital.

Funciones principales de ArchiDHu:

- **Gestión documental:** ArchiDHu permite la creación de expedientes digitales por cada caso que se procesa en la Unidad, asegurando la integridad y confidencialidad de la información.
- **Integración de documentación:** Facilita la integración de todos los documentos relevantes en el proceso de reparación, desde la solicitud inicial hasta la emisión de la resolución administrativa y los pagos correspondientes.

- **Acceso y trazabilidad:** Ofrece un sistema organizado para el acceso a la documentación y el seguimiento de los casos de las víctimas, mejorando la trazabilidad del proceso.
- **Automatización y eficiencia:** automatiza la organización de la documentación, reduciendo el riesgo de errores humanos y aumentando la eficiencia en la gestión de los casos.

Integración de ArchiDHu con Indemniza:

**Elaboración y publicación procedimiento de liquidación
y pago a las víctimas reconocidas en la Sentencia de la
Corte IDH “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia”**

Desde el mes de marzo del año 2024, se formuló de manera conjunta entre el Equipo UP y el enlace de la Dirección de Reparación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (de ahora en adelante enlace MIPG), una serie de criterios de operación procedimentales para el pago de indemnizaciones administrativas, así como mecanismos de gestión documental que dieran como resultado la creación de un procedimiento dentro de la entidad referente en pagos de sentencias internacionales y trámites ante la Corte IDH.

Este procedimiento estableció los criterios de operación para el cumplimiento del punto resolutivo 38 de la Sentencia, el cual inicia con la solicitud de pago de la víctima o sus familiares o, con el traslado de la Comisión de Constatación para la identidad y parentesco de los Anexos I, II y III en los términos del párrafo 538 de la Sentencia³, radicación, análisis preliminar, solicitud de los recursos y trámite del certificado de disponibilidad presupuestal y finaliza con la expedición del acto administrativo de pago de la indemnización a las víctimas.

El mentado procedimiento de liquidación y pago a las víctimas reconocidas en la Sentencia de la Corte IDH “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia” se publicó en la página web e intranet de la Unidad y tiene como última actualización el día 13 de diciembre de 2024 con los profesionales de la Dirección de Reparación del MIPG, a partir de las últimas actualizaciones sugeridas en el mes de noviembre



Actos Administrativos expedidos en 2024

En la vigencia fiscal del año 2024 se expidieron 139 Resoluciones de Indemnización a las víctimas de la UP, se realizaron 142 pagos, por un monto de \$11.798.749.743 pesos M/cte lo que equivale a un monto USD de \$2.750.000.-

Actos administrativos de indemnización víctimas up en 2025

Durante la vigencia 2025, la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas, en el marco de sus competencias frente al cumplimiento del fallo interamericano pagó 397 indemnizaciones por un valor de \$36.363.059.947, lo que corresponde a \$8.815.000 USD.

Es importante resaltar que fueron trasladadas por la Comisión de Constatación 1531 resoluciones durante 2025, de las cuales fueron efectivamente pagadas 397; están en proceso de pago 495 resoluciones de indemnización, proyectadas con fecha 31 de diciembre de 2025, las cuales cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 368625 del 29 de diciembre de 2025, correspondiente al rubro A-03-10-01-001 por concepto Sentencias.

Tabla resumen, pagos de indemnizaciones efectuadas durante los años 2023, 2024 y 2025.

Tabla 1. Resumen Anual de Casos Pagados

Año	Resoluciones	Pagos	Monto USD	Monto Pesos (COP)
2023	2	22	\$370.000	\$1.417.122.500
2024	139	142	\$2.750.000	\$11.798.749.743
2025	397	397	\$8.815.000	\$36.363.059.947
Total	538	561	\$11.935.000	\$49.578.932.190

Actos administrativos de indemnización víctimas up en 2026

- a) Hasta la presente fecha, para el cumplimiento de la sentencia internacional proferida en favor de las víctimas de la Unión Patriótica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solamente dio PAC en el mes de marzo de 2026 por valor de \$42.828.257.207,00 para el pago de las 495 resoluciones de pago de indemnizaciones a víctimas de la UP que quedaron proyectadas con fecha 31 de diciembre de 2025, hasta los primeros días del mes de marzo de 2026, y en este momento ya se han pagado efectivamente un aproximado de 397 indemnizaciones a las víctimas.

- a) La Comisión para la Constatación de Identidad y Parentesco, entre el mes de octubre de 2025 y hasta la fecha de finalización de su funcionamiento (31 de marzo de 2026) trasladó a la Unidad un total de Resoluciones de Constatación

Lo que en particular significa:

- ✓ Que se hace imperiosa la asignación de recursos por parte de la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permitan el pago de las indemnizaciones reconocidas a las víctimas de la Unión Patriótica en el marco del cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte IDH en el proceso “Integrantes y Militantes de la UP vs Colombia”;
- ✓ Que es absolutamente indispensable el fortalecimiento del actual grupo de trabajo UP, que actualmente cuenta con 8 abogados, incluyendo a la suscrita como líder del equipo y 5 profesionales sicosociales. Ello en razón al cúmulo de resoluciones que trasladó la Comisión de Constatación, justo al final de su funcionamiento, lo que per-se incrementará el trabajo a desarrollar por parte del equipo humano, el cual, de no ser reforzado, será insuficiente para atender el cumplimiento de la sentencia internacional.




Muchas gracias

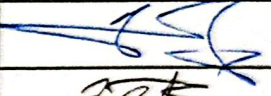

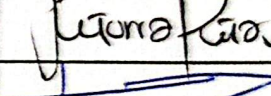

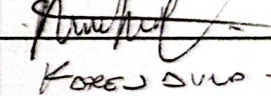
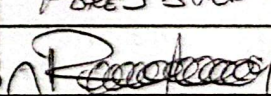
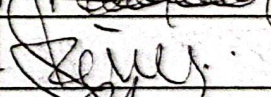
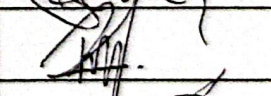

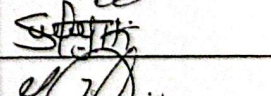
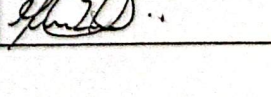



Unidad para
las Víctimas



 Unidad para las Víctimas	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: 162,14,15-10
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Versión: 05
		Fecha: 16/11/2023 Página 1 de _

No. de Acta: 74	Objetivo: Realizar reunión de equipo - Proceso jurídico indemnizaciones U.P.
Fecha de Reunión: 07-04-26	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA/C	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	Yunes Anselmo Lizano P.	N/A.	OAJ	yunes.lizano@	—	
2	JAVIER DELGADO LLO	N/A	D G	—	—	
3	Sergio Iván Torra Rojas	N/A.	GGC.	Sergio.torra@	3163670593	
4	Jorge Roberto Sanguino	N/A	GGC.	jorge.roberto@	3174160899	
5	Katherin Velez Martinez.	N/A.	GGC.	Katherin.velez@unv	3005767570	
6	KAREN JOHANA AVILA S.	N/A.	G.G.C.	Karen.avila@	3182942638	
7	Rosember Jiménez Sánchez	N/A	G.G.C.	rosember.jimenez@	313-3868093	
8	Sergio E. Baez Pineda	N/A	G.G.C.	Sergio.baez@unv	314 2723042	
9	Pablo A Ballesteros	N/A	G.G.C.	Pablo.ballesteros@gmail	3134064750	
10	Andrés M. Sánchez Ojeda	N/A	G.G.C.	andres.m.sanchez@	3115686777	
11	Silvia Patricia Hernández Tovar	N/A.	G.G.C.	Silvia.hernandez@unv	3253232026	
12	Elkin H. Pedraza Diaz	N/A	OAJ	Elkin.h.pedraza@unv	3046769512	

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / C: Campesino/NA. No aplica